

Aunque los ministros de la CEE no solucionaron ayer sus problemas pesqueros domésticos

## Las negociaciones hispano-comunitarias sobre licencias de pesca proseguirán en los próximos días

SOLEDAD GALLEGO-DIAZ, Bruselas

**Pese a que España no consiguió que el Consejo de Ministros de Pesca de la Comunidad Económica Europea (CEE) modificara, en la madrugada de ayer, su posición respecto al contencioso de nuestros pescadores, las negociaciones proseguirán en los próximos días, según fuentes españolas.**

«Nos encontramos en el punto en el que estábamos hace dos meses», señaló a EL PAÍS un portavoz de la misión española ante la CEE. Fracasada la estrategia de Madrid, debido no sólo a posibles fallos de nuestra diplomacia, sino también a la imposibilidad de que los diez pongan fin a su propia «guerra», el Gobierno español sólo tiene una posibilidad al alcance de su mano: cumplir la amenaza de restringir las importaciones de pescado comunitario y reemprender las negociaciones con la comisión y con los representantes permanentes de los diez, intentando arrancar una oferta mejor que la inicial de 115 licencias y 8.000 toneladas para la pesca de altura.

Las «estrategias» españolas tropiezan, sin embargo, con una gran dificultad: los negociadores españoles podrían encontrarse de lleno en una «espiral» cuyas consecuencias no parecen haber sido aún estudiadas con la calculadora en la mano. Los comunitarios, según las fuentes consultadas por EL PAÍS, podrían tener una «actitud comprensiva» ante unas medidas de represalia de carácter casi simbólico, pero difícilmente para una auténtica «guerra». Círculos de la CEE insisten desde hace días en la exigencia de que se reúna antes del

verano la Comisión Mixta de Seguimiento del Acuerdo de 1970, que no celebra sesión desde 1979. «No se trata, en absoluto, de encarar las relaciones con España con un espíritu mezquino», señalaban fuentes oficiosas de la CEE, «pero es lógico que la Comunidad desee chequear los resultados de un acuerdo suscrito hace ya más de diez años». Los españoles, conscientes de que el acuerdo de 1970 beneficia actualmente sus exportaciones, se resisten tenazmente a volver a sentarse en la mesa de negociaciones.

Medios cercanos al Consejo de Ministros de la CEE se mostraban ayer algo «sorprendidos» del impacto que parece haber tenido en la Administración española el momentáneo fracaso de las negociaciones internas de la Comunidad para poner en marcha la *Europa azul*. Los negociadores españoles debían haber sabido que la situación era «muy peligrosa» y que existían pocas esperanzas de que el Consejo de Ministros se ocupara del «problema español», explicaron. «La Comisión Europea», contradicen portavoces españoles, «estimaba factible el acuerdo interno y nos dio seguridades de que, aprovechando la euforia del momento, plantearía ante los ministros la

necesidad de *asumir* las consecuencias de la expulsión de nuestra flota y de mejorar sustancialmente la oferta actual, absolutamente inaceptable».

El fracaso de todos los intentos comunitarios de construir la *Europa azul* se debe fundamentalmente a la intransigente actitud de Gran Bretaña. «Vamos a llegar a la conclusión de que De Gaulle tenía razón», se quejaba un portavoz de la República Federal de Alemania, el país más perjudicado por la falta de acuerdo.

La posición británica podría resumirse así: Londres exige la reserva de una zona de pesca al norte de Escocia y en las islas Shetlands y Orcadas. Después de trabajosas negociaciones que duraron más de 72 horas, los expertos de la Comisión pensaron que podría arbitrarse un sistema de licencias para el acceso a esas aguas. Gran Bretaña exigió entonces que en las primeras doce millas no se permitiera la entrada de barcos de más de veinticuatro metros, lo que suponía prácticamente impedir la entrada de los pesqueros franceses y daneses que faenan tradicionalmente en esa zona y que, al proceder de puertos lejanos, superan ampliamente ese tamaño. Nueva negociación sobre las licencias que se podrían otorgar tanto en esa zona como en el emplisimo *box* que Londres pretende implantar.

En ese punto, rebasada la una de la madrugada de ayer, los ministros decidieron que haría falta al menos un mes para calcular

exactamente cuántas licencias necesitaría cada país y acordaron levantar la sesión hasta el próximo 9 de marzo. El último *tex* lo planteó la República Federal de Alemania. Sus barcos se han visto obligados a abandonar las aguas de Canadá, cuando se encontraban en plena faena, porque Gran Bretaña bloqueaba un acuerdo con Otawa. La RFA, que veía pasar los días y terminarse la temporada de pesca de sus barcos (capturan especies que no se encuentran después de marzo) exigió que se desbloqueara este acuerdo. Sería, dijo su ministro Josef Ertl, una demostración de que Londres está dispuesto a llegar a un acuerdo el próximo día 9. Peter Walker, el ministro británico, continuó impasible: hasta que no se regule exactamente —y de forma aceptable para Londres— el acceso a sus aguas, no habría acuerdo con Canadá.

La crisis comunitaria continúa, pues, abierta y en unos momentos especialmente preocupantes, cuando se tienen que empezar a discutir los precios agrícolas para el presente año.

En Madrid, mientras tanto, los ministros de Agricultura y Pesca, Jaime Lamo, y de Relaciones con las Comunidades Europeas, Eduardo Punset, se reunieron ayer por la mañana para estudiar la situación de la flota pesquera, y la decisión de los responsables comunitarios. En este sentido, es intención del Ministerio de Agricultura convocar hoy a los armadores de la flota que afaena en aguas de la CEE.